JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO

j09cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá, D. C., **agosto, catorce (14) de dos mil veinticinco (2025).**-

Acción de tutela de LIZETH NATALIA BOTERO RIVERA contra La Nación- **FISCALIA GENERAL DE LA NACION** -y la **UT CONVOCATORIA FGN 2024.**

Radicado: 110013103 009 2025 00336 00.

Secuencia: 21059 del 30/07/2025, hora: 08:57 a.m.

Ingresó: 8/08/2025.

LIZETH NATALIA BOTERO RIVERA formuló acción de tutela contra la **FISCALIA GENERAL DE LA NACION** -y la **UT CONVOCATORIA FGN 2024** al considerar vulnerado sus derechos *a la igualdad, al acceso a cargos públicos, al trabajo y al debido proceso*, motivo por el que solicitó que el Juez Constitucional:

- i. Que se ordene a la Fiscalía General de la Nación y/o al operador del concurso que revisen nuevamente mi documentación, aplicando correctamente el artículo 27 del Decreto Ley 017 de 2014, respecto del documento aportado que acredita mi título de posgrado como especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia.*
- ii. Que se ordene a la Fiscalía General de la Nación validar la certificación laboral expedida por la misma accionada, donde acredita el período laboral como Técnico Investigador I, desde el 15 de enero de 2024 a la fecha de expedición del mismo documento.*
- iii. Que se ordene a la entidad abstenerse de aplicar normas o lineamientos internos que contradigan lo dispuesto en normas con fuerza de ley.*

Como supuesto fáctico relató el que a continuación se compendia:

Del escrito de tutela se extracta para los fines que interesa enfatizar, que la accionante se inscribió en el Concurso de Méritos No. FGN-2024, en la FISCALÍA GENERAL DE LA NACION como consta en el reporte de inscripción, fase que en la convocatoria vencería el 30 de abril de 2025.

Que, la inscripción consistía en completar un formato por medios digitales en la plataforma SIDCA 3, incluyendo la obligación de cargar documentos en formatos preestablecidos relacionados con *i) formación académica; ii) experiencia; y iii) otros documentos*. Que el día 21 de abril de 2025, en su condición de aspirante y dentro del término establecido para ese efecto, realizó todo el proceso de inscripción, selección del cargo, y cargue de documentos, de manera concreta, se efectuó el cargue de documentos relacionados con formación académica, experiencia profesional, y otro tipo de documentos generales, para el cargo de "ASISTENTE DE FISCAL IV",

con código de empleo I-201-M-01-(250); Que una vez se realizó la Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos y condiciones de participación para el desempeño del empleo, la plataforma me informó lo siguiente: *“El aspirante acredita solamente el Requisito Mínimo de Educación, sin embargo, NO acredita el Requisito Mínimo de Experiencia, por lo tanto, NO continúa dentro del proceso de selección”*

Que en el término establecido por el Acuerdo No. 001 de 2025 del 3 de marzo de 2025, presentó reclamación a la decisión ya que, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el citado acuerdo y según las equivalencias contempladas en el Artículo 27 del Decreto Ley 017 de 2014, actualmente cumple con los requisitos solicitados por el cargo. Sin embargo, la respuesta obtenida a la reclamación VRMCP202507000000881 fue mantenerse en su estado de “NO ADMITIDA”.

Que solicitó en su reclamo validar el diploma de grado que certifica el posgrado en Ciencias Penales y Criminológicas expedido por la Universidad Externado de Colombia, lo anterior, con el fin de aplicar lo dispuesto en el Artículo 27 del Decreto Ley 017 de 2014 que establece: *“ARTÍCULO 27. Equivalencias de la Formación avanzada o de posgrado. Para el nombramiento de los servidores de la fiscalía general de la Nación se podrán aplicar las siguientes equivalencias: • Título de especialización por tres (3) años de experiencia y viceversa. (...)”*

Que la accionada indicó sobre este punto:

En atención a lo expuesto, a continuación, encontrará respuesta suficiente, coherente y pertinente al cuestionamiento interpuesto en su escrito de reclamación:

1. En relación con su reclamación, y atendiendo la solicitud expresada en ésta sobre la procedencia de aplicar equivalencia con la certificación de Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, expedida por la universidad Externado de Colombia, el 05 de diciembre del 2024, es preciso indicarle que no es posible acceder a lo solicitado, como quiera que de tal documento si aplica la equivalencia por 18 meses de experiencia profesional relacionada tal como se indica en la OPECE:

“Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada”

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, no es posible acceder a su solicitud, toda vez que de la documentación sobre la especialización para completar el requisito mínimo de la experiencia.

Que adicional, en cuanto a la certificación de experiencia laboral, aportó un documento expedido por la misma Fiscalía General de la Nación, en el cual se acredita mi vinculación como Técnico Investigador I, con fecha de inicio claramente establecida el 15 de enero de 2024 y con fecha de expedición del 21 de abril de 2025, con todo la observación de la accionada sobre este documento indica:

No es posible tener en cuenta el documento para el cumplimiento del Requisito Mínimo de Experiencia, toda vez que, no especifica los períodos en los que ejerció cada cargo o las funciones certificadas, siendo imposible determinar el tiempo total en cada cargo, o la relación de cada uno con las funciones del empleo, y de qué tipo de experiencia se trata. Pues, de lo único que se tiene certeza, es del último cargo desempeñado, sin que la certificación registre la fecha de INICIO de dicho cargo. nexract.

Que es por lo anterior que, al sumar los tiempos de experiencia acreditados mediante certificaciones —9 meses y 2 días como judicante, 1 año y 6 días como asesora legal, y 1 año, 3 meses y 6 días como Técnico Investigador I— se obtiene un total de 3 años y 14 días de experiencia profesional directa. A ello debe sumarse la equivalencia de 3 años adicionales por el título de especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, conforme al artículo 27 del Decreto Ley 017 de 2014, lo que da como resultado una experiencia total de 6 años y 14 días, superando ampliamente el requisito mínimo exigido para el cargo al que aspiro que pide 4 años de experiencia laboral.

Reunidos los requisitos de ley, el Despacho mediante proveimiento de 30 de julio de 2025, admitió la acción propuesta, ordenando oficiar a las dependencias accionadas, para que se pronunciaran sobre cada uno de los hechos y derechos que dieron origen a la presente acción.

INFORMES DE LOS CONVOCADOS

La **UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2024** argumentó que, la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN suscribió con la UNION TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2024, el Contrato No. FGN-NC-0279-2024 de 2024 para efectos que la referida institución desarrollara las etapas de verificación de requisitos mínimos, pruebas escritas, prueba de ejecución para la provisión de algunas vacantes definitivas de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación (FGN), aclara, que en respuesta a la reclamación de la actora constitucional, se le informó que la imposibilidad de aplicar equivalencia con la especialización acreditada, en razón a que la misma no reemplazaba *los 18 meses de experiencia relacionada* y que los demás documentos adjuntos en el ítem de experiencia suman un total de 20 meses y 28 días de experiencia relacionada; que sumandos ambos valores daban un 38 meses y 28 días de experiencia, lo que, resultaba insuficiente para cumplir con los 48 meses de experiencia que solicita para ocupar el empleo al cual aspiraba.

Enfatizó que, el certificado Laboral expedido por la Fiscalía General de la Nación no establecía los periodos en los que ejerció los cargos allí mencionados y que los documentos adjuntos en la reclamación, no fueron cargados en tiempo en la aplicación SIDCA3, por lo que afirma, resultan ser extemporáneos.

Enfatizó que las actuaciones adelantadas por la UNION TEMPORAL, están ajustadas a derecho, y no existe vulneración de los derechos fundamentales reclamados por la promotora constitucional, además que para controvertir dichos aspectos cuenta con otros mecanismos de defensa, máxime que para acceder a este mecanismo no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por intermedio del señor secretario técnico de la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, indica que en el presente asunto se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues corresponde a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de sus competencias, abordar y decidir los temas relacionados con los concursos de méritos; además, porque en lo que respecta dispuso de los medios o recursos administrativos idóneos para controvertir los resultados preliminares de la etapa de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación frente a los resultados publicados el 02 de julio de 2025, a través de la aplicación SIDCA3. Por ello, solicitó, desvincular a la entidad del orden nacional.

Esgrimió en esencia, que la accionante interpuso reclamación frente a los resultados definitivos dentro de la etapa de verificación de Requisitos Mínimos para las modalidades de Ascenso e Ingreso publicado el 2 de julio de 2025 por la UT Convocatoria FGN 2024, la cual fue resuelta de fondo en respuesta publicada a través del aplicativo SIDCA3.

Por tal motivo, las pretensiones formuladas por la accionante son improcedentes, debido a que se cuestionan las reglas del proceso de selección, y para tal caso, sería la Jurisdicción Contencioso Administrativo la competente para pronunciarse al respecto, a través de los Medios de Control para debatir el contenido de la respuesta otorgada el 25 de julio de 2025 por la UT Convocatoria FGN 2024.

Indicó que en cumplimiento de lo ordenado en el auto admisorio, realizó la publicación del auto admisorio de la acción de tutela y el escrito de tutela, en la página web de esta Entidad, a través del enlace: www.fiscalia.gov.co; sin embargo, expone que no se ha publicado el Acuerdo de Convocatoria para el Concurso FGN 2024, para lo cual adjunto la actuación correspondiente.

CONSIDERACIONES

De acuerdo a reiterada doctrina, la tutela tiene dos características que la identifican: la subsidiariedad y la inmediatez. Lo primero, porque únicamente puede instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa judicial o que teniéndolo, acude a la tutela para conjurar la situación de perjuicio irremediable en la que se halla. Lo segundo, su inmediatez, por cuanto que es un mecanismo que opera de manera urgente, rápida y eficaz para proteger el derecho fundamental que ha sido violentado o que se encuentra amenazado.

Entonces, cuando una persona natural o jurídica acude a la administración de justicia en aras de buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer los ritos procesales contemplados en el ordenamiento jurídico para el caso específico, y pretender, a través del ejercicio de otra acción, una pronta resolución del conflicto planteado. Por tanto, sólo se podrá hacer uso de la acción de tutela, cuando no exista en el ordenamiento otro mecanismo judicial o, cuando existiendo, la misma se utilice para evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

Analizada la causa, se evidencia, que mediante el proceso de selección de Licitación Pública FGN -NC-LP-0005-2024 de la Fiscalía General de la Nación, siendo estipulados los requisitos mínimos señalados en el Manual Específico de Funciones y Requisitos – MEFRM- (Versión 5 de mayo de 2024) expedido para conformar la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación – FGN-, proceso en el que la aquí accionante formuló reclamación sobre los resultados definitivos de la *etapa de inscripción* de VRMCP, la cual fue resuelta por la UT Convocatoria 2024, quien decidió no acoger lo solicitado por la accionante.

En primer término debe decirse, que en este caso, el reclamo de la accionante frente la decisión de inadmitirla al concurso de méritos evocado, cuenta con acciones regladas en la ley, específicamente aquellas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, para ser zanjadas por la Jurisdicción contencioso administrativa, e incluso con medidas cautelares previas, en tanto se advierta evidente agresión a la ley, por lo que, en razón a la subsidiariedad del amparo, este no resulta aquí procedente, máxime si del supuesto factico expuesto, no se advierte un perjuicio irremediable en cabeza de la promotora constitucional, por tratarse la disputa de una inscripción a un concurso de méritos que, trasciende para los aspirantes en meras expectativas y no en derechos consolidados.

En segundo término, debe decirse, que, de acuerdo con las posturas argumentativas expuestas por las partes en conflicto, se evidencia, que la

accionante pretende hacer valer una regla legal, en punto de la experiencia equivalente, *de contenido general*, frente a la regla del concurso de *experiencia específica, relacionada con el cargo al que aspira*, lo que de suyo no resulta procedente determinar, en este juicio de tutela, a efectos de considerar agredido su debido proceso en el decurso de la etapa de inscripción en el concurso, dado que la convocatoria hablaba de *experiencia relacionada y no general*, lo que en principio da crédito a la postura de la parte convocada como accionada en el amparo.

Ello resulta suficiente para negar el amparo propuesto, pues se trae al escenario de la tutela, un conflicto legal interpretativo y prevalente de las reglas de acreditación de experiencia para el cargo opcionado por la participante, sin que, aquí, en este escenario de tutela, se tengan elementos probatorios de certeza, para indicar que, para el caso en concreto de la inconforme, la regla legal a aplicar de modo preferente, sería la general por ella evocada, por sobre la especial publicada en la convocatoria. Situación que amerita entonces un juicio ante el Juez natural que debe asumir la controversia, y quien con conocimiento de causa y un despliegue probatorio razonable, establecido por el legislador, podrá zanjar la controversia con efectos de cosa juzgada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: **DENEGAR** la solicitud de amparo constitucional deprecado por **LIZETH NATALIA BOTERO RIVERA** contra **La Nación- FISCALIA GENERAL DE LA NACION -y la UT CONVOCATORIA FGN 2024**, y demás convocados, conforme a las consideraciones que anteceden.

Segundo: De no impugnarse este proveído, por la secretaría del juzgado remítase prontamente el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
LUISA MYRIAM LIZARAZO RICAURTE
JUEZ

eba

Firmado Por:

Luisa Myriam Lizarazo Ricaurte

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 009

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9134a95dc95a325e9ac5c9527b5190479871f1c6de79a41c3282b30011d23958**

Documento generado en 15/08/2025 07:18:47 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>